

LA DEMOCRACIA COMO AGRAVIO

LA DEMOCRACIA COMO AGRAVIO

ÁLVARO GARCÍA LINERA



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial

María Clara Diez - Diagramación y diseño de tapa

García Linera, Álvaro

La democracia como agravio / Álvaro García Linera; prólogo de Julián Rebón. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Facultad de Ciencias Sociales - UBA, 2024.

102 p.; 17 x 11 cm.

ISBN 978-987-813-729-2

1. Democracia. I. Rebón, Julián, prolog. II. Título.

CDD 306.2

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Estados Unidos 1168 | C1023AAB CABA | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875

clacso@clacsoinst.edu.ar | www.clacso.org

Este libro se realizó con el apoyo de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

.UBASOCIALES Carrera de
Socio
logía

Edición en México Brigada Para Leer en Libertad y Rosa Luxemburg Stiftung, mayo de 2024.

NOTA EDITORIAL

Un mundo que atraviesa un tiempo de intensas transformaciones requiere ser pensado en sus asuntos más acuciantes: las múltiples formas en que se ejerce la violencia, el incesante aumento de la desigualdad, los daños al ambiente y a los seres que habitan la Tierra, la violación de los derechos humanos, la militarización de los territorios o el impacto de una pandemia sobre el tejido social, especialmente en sus sectores más vulnerables.

Lejos de documentar el pesimismo, aspiramos a construir herramientas teóricas para transformar las situaciones de injusticia en un ejercicio incesante que liga la teoría con la práctica.

El **Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales** pone a disposición de las y los lectores una nueva colección de textos breves con los cuales esperamos contribuir a entablar diálogos tanto en torno a nuevos y viejos interrogantes, como a la búsqueda de respuestas originales a los problemas de nuestro tiempo.

La **biblioteca Masa Crítica** reúne a intelectuales que, desde una diversidad de perspectivas y tradiciones teóricas, han contribuido a la forja del pensamiento crítico enlazando reflexiones sobre tópicos y dilemas de nuestro presente histórico.

índice

Presentación por JULIÁN REBÓN	11
La democracia como agravio	23
Los límites de la democracia liberal	37
La igualdad y sus múltiples agraviados	67
Democracia compuesta	89
Bibliografía	100

PRESENTACIÓN

JULIÁN REBÓN*

* Doctor en Ciencias Sociales. Investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina, en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor titular de la carrera de Sociología de la UBA.

La democracia como agravio de Álvaro García Linera representa un estimulante ensayo sobre las tensiones y malestares que corroen esta forma política en los tiempos actuales y reafirma la pertinencia de considerar a su autor como uno de los grandes pensadores que provocan y animan el debate político latinoamericano de nuestra época.

Su actividad intelectual personifica la doble condición que enhebra su biografía: por un lado, la lucha por transformar una sociedad injusta y, por el otro, aquella disputa por construir más y mejor conocimiento sobre la misma. Álvaro, como pocas personalidades de nuestro tiempo, articula en su trayectoria la praxis y la teoría emancipatorias. Se destaca como un beligerante de muchas batallas, de experiencias que van desde la lucha guerrillera a ocupar lugares destacados en la política institucional. En este marco, ha sido vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y “copiloto” de Evo Morales en el gran proceso de transformación de dicho país. Pero también es un reconocido cientista social y ensayista político, autor de numerosos textos de referencia, muchos de los cuales pueden consultarse en la biblioteca de CLACSO en acceso abierto.

Inspirado en la tradición intelectual fundada por Marx, pero siempre abierto a otras perspectivas de la teoría social, nutrido por distintas disciplinas de las ciencias sociales según el tema a abordar y con una sólida estructuración lógica heredada de sus estudios en matemáticas, Álvaro nos brinda análisis que combinan realismo y perspectiva crítica. En sus textos centra su atención, entre otros tópicos, en el Estado, el capitalismo, la democracia, la comunidad y los movimientos sociales. Y, por supuesto, alimentado por la reflexión sobre las experiencias de las luchas plebeyas –en muchos casos con base en la reflexividad de su propia participación en ellas–, analiza con rigor las potencias y debilidades de los procesos de cambio y emancipación. Como muchos intelectuales de nuestra historia, tuvo que enfrentar cárcel y exilio por ser consecuente con sus determinaciones morales. Sus textos condensan con lucidez la historia de las gestas plebeyas, desde la pasión de quien lucha, pero también desde la reflexión serena de quien sabe que tiene que conocer más y mejor para resolver los obstáculos que enfrenta. En este sentido, el texto que aquí presentamos no constituye una excepción.

Una versión preliminar del texto de este nuevo libro de la colección Masa Crítica fue presentado en noviembre de 2023 como conferencia inaugural de las XV Jornadas de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, denominadas “40 años de democracia. Aportes y desafíos de la sociología para comprender y transformar nuestro tiempo”.¹ El contexto histórico-político de estas jornadas fue paradójico. Por un lado, tuvieron lugar en el año de las celebraciones por el aniversario del período democrático institucional más prolongado de la Argentina. Por el otro, se desarrollaron pocos días antes de un *ballottage* presidencial en el que una de las opciones electorales estaba encarnada por una propuesta signada por el hipercapitalismo en lo económico y el autoritarismo en lo político, muchos de cuyos postulados y promesas entraban en tensión, cuando no en franca contradicción, con consensos democráticos alcanzados hasta entonces. Finalmente, dos semanas después de la conferencia, esta propuesta, personificada

1 La conferencia original puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=M2hr_7pkofl&t=65s

por Javier Milei, se impuso en las elecciones, lo que reforzó la pertinencia y urgencia de las reflexiones de García Linera.

La conferencia-ensayo es un género central en el repertorio político-académico de Álvaro García Linera. A través de esta modalidad discursiva, el autor apela a la reflexión libre pero no por eso menos nutrida en las investigaciones disponibles. Recurre a la relectura de los clásicos, pero también a las discusiones teórico-académicas actuales, haciendo gala de una permanente actualización bibliográfica. No reflexiona en abstracto, por el contrario, el calor de los debates políticos de la coyuntura es lo que suele animar y dar aire a su reflexión, aunque su mirada siempre involucre una perspectiva de mediana y larga duración. Y lo hace de un modo que combina el análisis riguroso con la vocación pedagógica del profesor que comparte diversas ejemplificaciones para facilitar la lectura de un público más amplio. La apelación al ensayo es, de este modo, una forma de expresar su doble condición de político y cientista social; de intelectual, en el sentido cabal del concepto.

El texto aborda los “tiempos infértiles” para la democracia, en particular en su acepción

liberal, es decir, la forma dominante en la cual los procesos de democratización se institucionalizaron en la mayor parte del mundo.

En sintonía con su producción más reciente, aborda la recesión democrática desde una perspectiva regional y global en el marco de la crisis del ciclo de acumulación y dominación signado por el maridaje entre neoliberalismo y democracia liberal (Cf. García Linera, 2023). Recordemos que, en conjunto con la disolución de la Unión Soviética y la expansión del neoliberalismo, la democracia liberal, con sus particularidades nacionales, se expandió como nunca en la historia sin otros regímenes que la desafiaron competitivamente. Su consolidación representó una reducción de la *demodiversidad*, pero también un repliegue de los autoritarismos militares, especialmente en nuestra región.

La hipótesis desarrollada por el texto postula que el debilitamiento del apego a la democracia representativa liberal reviste un carácter estructural, producto de la crisis del ciclo histórico marcado por el neoliberalismo. Este proceso desarticula el horizonte predictivo que ordena la vida y las esperanzas de la población. En un tiempo liminal, en el cual reina

la incertidumbre, el malestar con la democracia se expresa de diversas formas como pérdida de legitimidad, crecimiento de formas autoritarias y erosión de la representatividad de los partidos tradicionales.

En contraposición al fetichismo democrático de las oligarquías institucionales, pero también de la defensa acrítica y celebratoria dominante a la que recurren parte de las izquierdas y el progresismo ante las amenazas autoritarias y los retrocesos históricos, aquí se presenta un análisis con un fuerte contenido crítico. La democracia liberal es conceptualizada aquí como una forma de dominación a partir de desagregar los obstáculos epistémicos que la sustentan, la falacia de la igualdad que encubre los distintos mecanismos que producen la desigualdad a través de los cuales funciona, así como la tendencia a su oligarquización.

El debilitamiento de la democracia en las últimas décadas se nutre de procesos que son vividos como agravios por distintos grupos de la estructura social y política. Estos van desde la pérdida de condiciones de vida o la imposibilidad de mejoras por parte de la plebe, a la amenaza de privilegios de sectores de la población por

procesos de igualación. Se alimenta tanto de los que no soportan más desigualdad y exclusión, como de aquellos que sienten la amenaza de ser “igualados” a quienes perciben como inferiores socialmente. Entre estos encontramos a quienes viven como amenazas las crisis de desigualdades estamentales –mujeres, pueblos originarios, afroamericanos– desarrolladas con fuerza en tiempos recientes de nuestra región o, incluso, procesos muy acotados de recomposición de las clases subalternas. Y también, como siempre en la historia, el declive democrático se sustenta en el agravio que sienten los autoritarios ante su existencia. En tiempos de crisis en los cuales el “todo o nada” o la radicalidad política se escribe con la mano derecha de la historia, sectores de las clases dominantes buscan en la reversión de la democracia el medio para disciplinar a las clases subalternas y restablecer el orden y el horizonte perdidos.

Las reflexiones críticas sobre la democracia mínima liberal no le quita la valoración al logro histórico que esta representa frente a las dictaduras y dinastías, más bien la considera la base para su profundización. Esta habilita mejores condiciones de lucha para las clases populares y

sus múltiples espacios de experimentación democrática de carácter asociativo, que animan la política de las calles tan habitual en la América latina reciente. Política de las calles que desborda, enfrenta y en ocasiones complementa a la democracia institucional. La democracia liberal misma, es también resultante de los procesos de ampliación impulsados por las clases “menesterosas” y otros grupos sociales subalternizados.

Álvaro, como buen intelectual en tiempos liminales, consciente de la potencia performativa de la intervención en los momentos de crisis, postula en voz alta la necesidad de construir una “democracia compuesta” que se nutra de la forma liberal pero la amplíe con base en múltiples procesos de democratización que anidan en la sociedad.

Este ensayo, de afán provocativo, seguramente disparará en el lector atento, interrogantes de diverso tipo: ¿Si los agraviados son heterogéneos en su condición, las amenazas a la democracia liberal son también diversas en su composición política? ¿Son los movimientos sociales, dada su composición compleja y variada, como lo muestra la historia reciente de nuestra región, necesariamente un elemento

democratizador? ¿Cuál sería el diseño institucional que permitiría configurar una democracia compuesta que articulara distintas formas de participación sin producir una “estatización” de la sociedad civil? ¿Qué modelo de acumulación podría sustentar una democracia de este tipo?

El texto, más que concluir certezas, tiene la riqueza de potenciar la reflexión, de interrogar el presente e invitar, para quien se sienta convocado, a una agenda de investigación e intervención. El desafío que propone radica en desbloquear teórica y prácticamente aquello que anida en muchas de las luchas populares. El autor nos advierte que una mayor democratización no será el resultado de la astucia de una decisión gubernamental ni de la discusión intelectual, más allá de la importancia de estas acciones, sino de la insurgencia democrática de la sociedad, de las luchas que se escriben en tiempo presente y de la posibilidad de traducir a partir de ellas los agravios en esperanzas plebeyas.

Buenos Aires, febrero de 2024.

Bibliografía

- García Linera, Álvaro (2023). *La comunidad ilusoria. Una reflexión sobre el Estado, lo público, lo común, la protesta ciudadana y la esperanza en tiempos de incertidumbre mundial*. Buenos Aires: Sudamericana.

La democracia como agravio

LA DEMOCRACIA LIBERAL ERA EL ÚNICO MODELO POSIBLE...

Son tiempos infértiles para la democracia. Al menos para la democracia liberal tal como la conocimos hasta ahora. Todas las mediciones que periódicamente se hacen sobre las “lealtades” democráticas en varios continentes muestran una creciente desafección de la ciudadanía. El número de países con gobiernos llamados “poco democráticos” o autoritarios ha aumentado en la última década (EIU, 2020; Our World In Data, 2022; *The Economist*, 2023). Algunas investigaciones hablan de una “recesión democrática” en los últimos seis años, que incluye a los países anteriormente considerados con “democracias saludables” (International IDEA, 2023; Repucci y Slipowitz, 2021). Los estandartes de la democracia liberal sólida, como Estados Unidos y Europa, no solo están asediados por el crecimiento continuo de fuerzas políticas iliberales, sino que además sus propias instituciones, antes pulcras y estables, ahora son objeto de escarnio y violencia, como sucedió durante el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en 2021. El “paraíso” al que hace referencia el representante de

asuntos exteriores de la Unión Europea (Ayuso, 2022) al hablar del Occidente blanco, católico y liberal, cada vez se parece más al quinto círculo infernal de Dante, hundido en el fango del odio y la polarización.

Incluso el mando del mundo, antes previsiblemente con Estados Unidos a la cabeza, hoy parece confuso y en riesgo frente al ascenso de un “asiatismo” no liberal capaz de realizar en cuatro décadas proezas de industrialización y movilidad social ascendente que en Occidente tardaron dos siglos en alcanzarse (World Bank, 2021).

El propio debate académico en las universidades del Norte respecto al estado de la democracia también está atravesado por un pesimismo desenfrenado. Ya no se trata solo del perpetuo debate sobre la “crisis de representación” de las democracias modernas. Hoy los títulos de las investigaciones son cada vez más catastróficos. Desde el “desencanto democrático” de Przeworsky (2022), la “regresión democrática” de Piketty y Cagé (2023), cómo “mueren las democracias” de Levitsky y Ziblatt (2018), el “fin del siglo democrático” de Mounk y Foa (2018), la “crisis del capitalismo democrático” de Wolf (2023), hasta el “fin de las democracias”

de Runciman (2019) o, más lúgubre aún, el “fin de los tiempos” de Turchin (2023), todas hacen gala de un apesadumbrado balance del estado actual de la democracia global. El mismo debate sobre el populismo, en la mayoría de los casos, es tratado como una anomalía (Rosanvallon, 2020) o una degradación de algún modelo de democracia que solo existe –y ha existido– en las cabezas de algunos escritores.

¿Y es que cuál es la “verdadera democracia” desde la que se pueden medir los sistemas de gobierno? Está claro que no se trata de la Atenas antigua en la que la democracia directa se combinaba con el sorteo de los cargos de gobierno (Manin, 2018). ¿Es entonces la de Francia, donde el presidente gobierna por decreto sin tener en cuenta al parlamento a la hora de tomar decisiones estructurales, como las que involucran al sistema de jubilación? (*France 24*, 2023). ¿O la de Alemania, donde el presidente ha sido elegido por tan solo el 19,4 % de las personas con derecho a votar? ¿O la de Canadá, donde combatientes nazis de la Segunda Guerra Mundial son homenajeados por un parlamento de pie? (*BBC News Mundo*, 2023) ¿O la de Estados Unidos, donde el presidente no es elegido directamente

por los votantes y la censura de medios de comunicación extranjeros se mueve en función de las guerras en las que este país se involucra?

No hay pues una verdadera democracia en la cual mirarse de manera inequívoca. Lo que hay son democracias múltiples, diversas, que tienen en común la búsqueda del ejercicio de la soberanía por parte del pueblo y la ilusión respecto a que cada una de ellas es la mejor forma de esa soberanía.

Cada práctica democrática concretamente existente, en este sentido, construye intelectualmente su propia legitimación narrativa como universal en una pugna discursiva de fuerzas políticas desplegadas de la que cierta academia dominante debería asumirse parte, a la par que debería abandonar el pensamiento mágico que pretende ajustar la realidad a sus “verdades” imaginadas.

Así, llegamos a una primera conclusión sobre la democracia: hoy en día, este concepto ha adquirido el rango de un valor social normativo y prescriptivo en la constitución de los poderes públicos. Cualquier enunciación discursiva sobre el campo político, para adquirir legitimidad y reconocimiento social, debe referirse de alguna manera a la “democracia” como bien sustantivo de la interacción colectiva. Pero, a la vez, los contenidos atribuidos a esta son fruto de una competencia de significaciones dirimida en las últimas décadas en múltiples libros, conferencias, investigaciones y debates. Es decir, no existe una “verdadera” y concluyente definición de democracia, en un sentido transhistórico y objetivo. Lo que se entiende por democracia en un momento dado es siempre un producto provisional de intersubjetivaciones entre distintas correlaciones de fuerzas de la acción comunicativa e institucional, pero –no lo olvidemos– de acciones comunicativas en las que los poderes de enunciación no están distribuidos de forma igualitaria entre los concurrentes a la producción de la definición. Dado que la distribución de la capacidad para nombrar las cosas es siempre desigual, existen, en un momento dado,

definiciones dominantes, consideradas válidas, y definiciones subalternas, consideradas ilegítimas. Y, a la vez, se produce una homología entre la definición dominante de democracia y las condiciones de existencia de las clases dominantes de la sociedad.

La validez de una definición, su rango de verdad es, así, una contingencia histórica resultante de la estructura de fuerzas discursivas, organizativas y económicas dentro del campo político y del campo intelectual. Lo que hoy es considerado como la definición aceptable y moralmente superior de una categoría es probable que mañana sea tomado como irrelevante y sustituido por otro sentido hasta entonces considerado marginal.

En teoría social, las “verdades”, las evidencias, las legitimidades son arbitrariedades culturales resultantes de la trayectoria histórica de la estructura y el funcionamiento de las luchas del campo intelectual, de sus procesos de acumulación, verificación y competencia interna, que han consagrado cierto modo de entender, investigar y nombrar el mundo. Cuando se trata de categorías que afectan o son utilizadas dentro del campo político, la construcción del

régimen de validez del concepto combinará una arbitrariedad cultural con una arbitrariedad política, en correspondencia, a su vez, con las fuerzas del campo económico.

Así, la fuerza apodíctica que durante varias décadas tuvo la definición liberal de democracia se sostuvo, más que en la lógica argumental de sus defensores ideológicos, en la lógica práctica de una existencia institucional fusionada a la arrolladora expansión del libre comercio y la globalización. Con el derrumbe de la Unión Soviética y el desplazamiento de la economía estatal planificada, la potencia triunfante impulsó el llamado Consenso de Washington que, en lo sustancial, afirmaba que el libre comercio, con su correlato de democracia liberal, era el único destino inevitable de la humanidad que todos los países, tarde o temprano, tendrían que abrazar. Cualquier otro debate sobre otras formas de democracia distintas a la liberal no pasaba de ser una marginal excentricidad académica. Había que leer a Dahl o Rawls y dejar en el baúl de los arcaísmos a Marx o Gramsci.

Ya sea en su versión minimalista, como método competitivo “mediante el cual unos individuos adquieren el poder de decidir”

(Schumpeter, 1983, p. 343), o en su lectura procedimental, como conjunto de reglas para la solución pacífica de conflictos (Bobbio, 1986, p. 136), la democracia liberal se presentaba como un perfecto mercado autorregulado, solo que en versión política. Cualquier asociación política podía ofertar sus propuestas y disputar periódicamente las preferencias del voto, que dirimía quiénes eran ganadores y quiénes perdedores. Los votantes escogían del escaparate de ofertas variadas la que les resultara de su preferencia, entregaban su voto y, a cambio, el partido mayoritariamente elegido ejecutaba sus propuestas. Había una compraventa de productos políticos en la que todos recibían lo que querían. Y funcionó, con fluctuaciones normales y regulables: mientras la economía se estabilizaba, los mercados se ensanchaban gracias a las privatizaciones de lo público y el “goteo” de la riqueza salpicaba a la gran mayoría de los “perdedores”. Era solo cuestión de tiempo para que también ellos fueran parte de los “ganadores”. Incluso el propio orden político global podía ser visto como una extensión de este mercado. El libre comercio intensificaría la interdependencia de los mercados de todos los países, de las cadenas de

suministros, reduciría al mínimo los riesgos de conflicto y garantizaría así la seguridad global. Y, como parte de ella, la natural supremacía militar norteamericana.

PERO, DE PRONTO, EL MUNDO CAMBIÓ

La orgía privatizadora global devino en resaca. El crecimiento económico, que durante veintiocho años tuvo un promedio mundial del 3,1 %, entre 2010 y 2022 nuevamente cayó a un escaso crecimiento del 2,7 %. El Banco Mundial calcula que entre 2023 y 2030 la situación empeorará aún más, pues el crecimiento caerá a un 2,2 % en promedio (World Bank, 2023). Hemos entrado en una nueva década perdida.

Paralelamente, las desigualdades se han profundizado obscenamente, lo que redundo en mayor malestar social. Las clases medias se estancaron y, en algunos lugares, se redujeron. El libre comercio convirtió ciudades industriales de Occidente en basureros y a sus clases trabajadoras en emprendedores precarizados. Los mercados comenzaron a devorarse a sí mismos y tuvieron que ampararse en el denostado Estado para salvarse. Primero, los bancos en 2008;

luego, las bolsas de valores y las empresas en 2020; finalmente, la supremacía geopolítica norteamericana desde 2021. No han pasado ni cuarenta años del “fin de la historia” y el Estado ya está de regreso. El orden liberal ha comenzado a corroerse y, desde el 2018, las leyes del mercado que reinaban en las economías más desarrolladas iniciaron una lenta y vergonzosa retirada. Desde entonces, están siendo sustituidas por guerras de aranceles, entre Estados Unidos y China primero (Bown, 2023); luego, entre Estados Unidos y Europa y, como lamenta el FMI, ahora en el mundo entero. Las restricciones al libre comercio que durante décadas apenas alcanzaban a doscientas por año, de tipo marginal y en países asimismo marginales, en 2022 han saltado a más de dos mil quinientas, en sectores de gran consumo y a la cabeza de las economías occidentales más grandes (IMF, 2023, p. 77). El proteccionismo industrial ha sustituido la eficiencia de los proveedores. La Unión Europea, en 2021 y 2022, ha destinado más del 3 % de su producto bruto anual a subvencionar y proteger a su industria continental (Criscuolo et al., 2023). Estados Unidos ha decidido subvencionar con US\$400.000 millones sus autos eléctricos,

su industria de microprocesadores y todo lo que tenga que ver con la “seguridad nacional” (The White House, 2023). Europa ha lanzado al basurero la ley de la oferta y la demanda para su consumo energético al subvencionarlo con €651.000 millones en el último año y medio (Sgaravatti, Tagliapietra Trasi y Zachmann, 2023). El libre mercado ha dado lugar al mercado de amigos, las cadenas de valor globales a las cadenas de valor seguras o, en el lenguaje de Von der Leyen (2023), “sin riesgo”. El mercado global ha devenido mercado geofragmentado y la utopía del mercado autorregulado se hincó ante la evidencia del mercado estatalmente producido.

Si este caos reina en la economía, en el mercado político triunfa la sensación de apocalipsis. No es casual que en la última década se haya pasado del debate del emergente populismo, considerado como una extraña enfermedad transitoria de la democracia, al horror de la muerte de las democracias. Ciertamente, la democracia liberal está en un mal momento. Ya no es una excepcionalidad latinoamericana el surgimiento de líderes que rechazan consensos con los opositores, que plantean desconocer

las viejas instituciones y que echan la culpa de todos los males que agobian al común de los ciudadanos a una minoría pervertida de ricos, mentirosos y abusivos que deben ser castigados. El hecho de que este discurso reclute masivamente adeptos en muchos países, comenzando por Estados Unidos, Italia, Francia, Hungría, Brasil o España, y por largos períodos de tiempo, es una demostración fáctica de que no estamos ante una desviación circunstancial ni un arrebató puntual de enceguecimiento político. La democracia liberal-representativa, nacida de las revoluciones francesa y norteamericana del siglo XVIII, está en decadencia. Esta crisis es el final de una deriva natural e inevitable producto de la propia democracia liberal, en el corazón de cuya vinculación prostituida con la economía de libre mercado se halla la fuente del problema.

Los límites de la democracia liberal

La democracia liberal funciona como un conjunto socialmente aceptado de normas y valores que enmarcan las disputas políticas en momentos en que la economía tiene un crecimiento estable, hay un mínimo de avances en el bienestar colectivo y, sobre todo, cuando el horizonte predictivo de las clases sociales, dominantes y dominadas, tiene un rumbo imaginado. Todo ello permite que las élites políticas compitan, disientan y luchen, pero siempre dentro del espacio de expectativas estructurales compartidas: capitalismo de Estado entre los años 1940 y 1970; neoliberalismo entre 1980 y 2005. Si a ello sumamos la capacidad que tiene la democracia liberal de subsumir, de manera retorcida y luego recortada, las instituciones de derechos jurídicos, políticos y sociales conquistados por la acción colectiva de las clases plebeyas –es decir, el llamado Estado de derecho (libertad de asociación, de opinión, igualdad ante la ley, derecho al voto, etc.)–, está claro que, bajo dichas condiciones, es posible una tolerancia moral entre gobernantes y gobernados, que se legitiman mutuamente a través de la democracia liberal. Tales son los tiempos en que la democracia liberal se presenta al sentido común como la mejor forma de gobierno posible.

Pero cuando la expansión económica tropieza, cuando los recursos a distribuir con cuentas gotas se secan, cuando la necesidad de recortar derechos sociales se requiere para mantener el equilibrio fiscal –como viene sucediendo durante la última década en las principales democracias–, todas las perversiones internas y los límites que engendra el liberalismo explotan y, **desde el interior del mismo individuo, estallan otros “pueblos”, otros vínculos de sociabilidad activa que desenmascaran los límites de la autosuficiencia del solitario ciudadano liberal.** Veamos estos límites interiores.

PRIMER LÍMITE. LA DEMOCRACIA LIBERAL COMO OBSTÁCULO EPISTEMOLÓGICO

El liberalismo político construye un tipo de “pueblo” sujeto a prerrogativas: es el individuo aislado, que se hace a sí mismo; el portador de preferencias personales susceptibles de ser homogeneizadas y contabilizadas por el voto, en

lo que Marey (2011) ha denominado la “democracia agregativa”. No es un individuo deliberativo que construye opinión en el debate público, ni un ciudadano dependiente de todos los demás, sino un solitario consumidor que elige ofertas políticas, como quien elige tamaños o texturas de ropa. Ese “pueblo” individualizado, agregado uno al lado de otro, en su irreductible individualidad, como un saco de papas, existe en tanto el mundo funciona tal como los individuos esperan que funcione.

Pero, a pesar de la utopía liberal del individuo que se produce a sí mismo, siempre existen otros “pueblos” subyacentes dentro de la ciudadanía liberal. Son los sindicatos, los gremios, las comunidades, las asociaciones laborales, territoriales y funcionales que públicamente no son visibles pero que unifican territorialmente criterios colectivos, que regulan asuntos comunes locales, que protegen o defienden cotidianamente a sus miembros de la arbitrariedad gubernamental, de las burocracias extorsivas o de la patronal explotadora. Las personas siempre y en todos los países del mundo están organizadas de maneras múltiples y complementarias. Cada individuo es un integrante, de

manera simultánea, de numerosos agregados sociales, tradicionales y modernos. Es decir, es un ser social que en cada uno de los microcosmos en que interactúa ha aprendido a hablar, a juzgar, a comprender la señalética del mundo, a usar el dinero o la computadora, las leyes o el arado, a influir y a actuar en correspondencia con lo que los demás esperan de él. Un individuo sin sociedad, tal como imaginaba Margaret Thatcher, es solo un amasijo inútil de “huesos y tendones” sin función alguna, no una nación. Todo individuo es siempre la condensación de la historia de la humanidad en su cuerpo actuante. Es un pedazo comprimido de toda la sociedad y de toda su historia. El propio dinero ante el que se arrodilla el sujeto liberal, por sí mismo, es solo un papel pintado sin valor alguno. Pero como vínculo entre personas que comprenden la semántica colectiva del valor de las cosas, es la mismísima medida de la riqueza contemporánea.

Estas formas subyacentes de asociatividad, modernas y tradicionales, que constituyen maneras contingentes y moleculares de “pueblo” real que delibera, que construye preferencias políticas, que alienta protagonismos colectivos,

no existen para el liberalismo político, para el que resultan irrelevantes. Pero están ahí. Pueden ser opacadas temporalmente por la retórica bulliciosa del individualismo *propietarista*, elector y consumista que supuestamente se debe a sí mismo. Sin embargo, cuando la economía se estanca, cuando la autosuficiencia se desploma ante la evidencia del desempleo, la masiva precariedad laboral, la injusticia y la desigualdad escandalosa, esas asociaciones prácticas saltan a la palestra pública, se articulan, se fusionan con otras, para hacer valer como indignación y movilización el sufrimiento soportado, para hacer oír su voz y, llegado el caso, para sustituir los imaginarios y las narrativas de vida en común, de porvenir, por encima o en contra de las narrativas, ahora fallidas, de las élites poderosas gobernantes. Surgen así los movimientos sociales, los levantamientos populares, los estallidos. Se trata de maneras plebeyas de politización colectiva, de democratización de la palabra y la acción. Los asuntos públicos, anteriormente monopolizados por las burocracias y las élites efectivas, se vuelven ahora de dominio popular. Todos se sienten convocados a opinar, a proponer y a actuar.

Es el momento democrático de la plebe en acción que reorganiza el sentido del mundo, que alumbra nuevos posibles de la vida en común. El orden social de lo decible, de lo posible y lo inaceptable se transforma y, de mediar actos electorales o revoluciones, el orden estatal y la administración de la riqueza económica pública se transforma.

Pero la democracia liberal no puede comprender esta realidad. Hay una ceguera epistemológica para dar cuenta de esta reverberación molecular de la sociedad, de su visibilización cíclica. Peor aún, hay un obstáculo cognitivo para comprender las formas de fusión activa de esas moléculas colectivas. Por eso, cuando se hacen presentes, no se atina más que a descalificarlas como fruto de algún desorden mental o una conspiración. La ideología liberal no es un conocimiento del mundo sino una fe,

una creencia, y todo lo que esté fuera de tal credo parece no existir o ser una herejía a purgar, un salvajismo a disciplinar. Que luego estos colectivos populares que salen a las calles sean calificados como “alienígenas”, según la escabrosa declaración de la esposa del expresidente chileno Sebastián Piñera al preguntarse por el origen de los cientos de miles de jóvenes durante el estallido de 2019, muestra hasta qué punto el ideologema liberal es, sobre todo, un prejuicio respecto al mundo.

Así, imposibilitada de comprender esta realidad de la composición molecular de la vida social, la democracia liberal está condenada a ser rebasada por los hechos en tiempos de crisis sin que pueda dar una solución al desborde. Por cansancio, coacción o soborno, podrá apaciguar o asfixiar temporalmente la ebullición colectiva, pero no podrá darle solución, lo que creará las condiciones de nuevos estallidos que pondrán más en duda la propia pertinencia histórica de esa forma de democracia.

SEGUNDO LÍMITE. LA IGUALDAD COMO FALACIA

La democracia liberal funciona como un mercado de oferentes y demandantes. Cualquier persona tiene derecho a organizarse, a plantear propuestas de organización de la vida en común; igualmente, todo ciudadano posee la facultad de hacer conocer sus iniciativas y de competir electoralmente o, simplemente, de esperar la presentación de ofertas y optar por una de ellas. La igualdad de oportunidades para hacer política es una condición universal de la ciudadanía moderna. Nada impide que unos puedan agruparse y otros no; que puedan ser electos y otros no. La democracia liberal se enorgullece de su apego a la igualdad política de los ciudadanos. Sin embargo, esto no siempre fue así. En los inicios del régimen liberal, solo los propietarios votaban y los que carecían de dicha propiedad inmueble no lo podían hacer. De la misma manera, las mujeres solo adquirieron el derecho al voto a mediados del siglo XX, incluso en las democracias más antiguas. En América Latina, en todos los Estados nacientes, los *indios*, mayoría demográfica, no votaron hasta bien entrado el

siglo XX. En todos los casos, no propietarios, mujeres, indios o jóvenes de 18 años conquistaron el derecho al voto ante la propia institucionalidad liberal únicamente a base de largas movilizaciones e insurrecciones.

Además de ello, la igualdad que exhibe el liberalismo es la igualdad abstracta de asociarse y contender, mas no la igualdad material o real de competir en condiciones similares. Estas condiciones materiales de participación política están brutalmente jerarquizadas por pertenencia étnica y de clase. Un campesino de la Puna de apellido indígena, que apenas ha llegado al bachillerato porque debía trabajar con la familia para poder comer y que pronuncia con dificultad el castellano, porque su lengua materna es el quechua, no está en las mismas condiciones de competir, de ser tomado en cuenta por la “opinión pública”, que un conocido empresario educado en las mejores universidades extranjeras que habla tres idiomas y desplaza el cuerpo y el tono de voz con la autoridad de quien se sabe reconocido, admirado e influyente entre los poderosos del país. Los dos son, en teoría, iguales en derechos, pero, sin embargo, abismalmente desiguales en las condiciones materiales

de ejercicio de tales derechos. El primero trasluce en las dudas de su voz, en el ligero encorvamiento de su cuerpo y en las fallas sintácticas de su discurso el origen social subalterno de donde proviene, lo que reafirmará en el acto la propia subalternidad de su oferta política. La dificultad para abarcar con solvencia todos los temas del orden público delatará su secular distancia histórica con respecto a esos asuntos de Estado, al igual que su familia y su clase social. En cambio, el político o empresario de familia con trayectoria estatal podrá transitar con soltura de un tema gubernamental a otro; la aceptable dicción de sus frases, el aplomo del cuerpo, su propio color claro de piel y la elegancia ante el público corporalizarán la larga adhesión de su clase social al poder y transmitirán la seguridad que se está ante un “hombre de Estado”, no ante un intruso. Las clases dominantes históricamente se adhieren al Estado en la misma medida en que el Estado reconoce “naturalmente” a los suyos en un vínculo casi endogámico.

Si analizamos, por su parte, las posibilidades de despliegue práctico en el mercado político en términos de una “libre” competencia, el obrero del conurbano o el campesino de la Puna

podrá hablar de sus propuestas con sus allegados del barrio y el trabajo; podrá ser invitado a una radio local para dirigirse a algunos cientos de oyentes; incluso, tal vez, el hijo lo ayudará a elaborar un Tik Tok de campaña que podrá ser visto por otros miles antes de quedar sepultado por una avalancha de otros Tik Tok mejor elaborados, más emotivos e impactantes de los oponentes. En tanto que el empresario o político de prosapia, alentado por poderosas corporaciones, podrá ser acogido en los noticieros estelares de las más importantes cadenas noticiosas para mostrarse encantador ante millones de espectadores. Su foto, retocada, abrirá la nota central de los periódicos. Las asociaciones más influyentes del país lo invitarán a magníficos cócteles para admirar y comentar la sapiencia del candidato y las redes sociales serán bombardeadas cada minuto por atractivas producciones audiovisuales perfectamente segmentadas por clase social, barrio, oficio, preferencia musical y tiempo de ocio, que lograrán en el día decenas de visualizaciones y *likes*. Al final, que una candidatura se imponga no es fruto de las brillantes ideas que propone, sino un resultado natural de la colusión estructural del dinero y el poder político.

La “igualdad de oportunidades” en realidad encubre la abismal diferencia entre quienes pueden comprar millones de “oportunidades” con dinero y aquellos que solo tienen una única oportunidad resultante de su propia existencia.

Sin embargo, esta complicidad estructural entre el poder económico y el poder político no es fatal ni irreversible. En ciertos momentos extraordinarios, como los grandes estallidos sociales, el afecto político de la clase dominante y el dinero tiene obstáculos para validarse. Como en las crisis económicas el sistema de creencias dominante se fractura y debilita, hay posibilidades de que otros criterios de legitimidad plebeyos –como la denuncia de las injusticias, la demanda de reconocimiento de lo popular o la distribución de la riqueza– puedan sobreponerse a la lógica mercantil del ámbito político, para dar lugar a la irrupción de liderazgos con capacidad de aglutinación de lealtades colectivas y

victorias electorales. Es lo que sucedió con Evo Morales en Bolivia o Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. En todos los casos, estos resultados excepcionales en la historia política no son fruto de la eficacia de la igualdad liberal, sino del desbordamiento de su igualdad ilusoria y de la instauración de un tipo de paridad plebeya emergente de un nuevo principio de igualdad a partir de la acción colectiva y de la revuelta. Por eso no es de extrañar que las grandes transformaciones políticas ocurran primeramente en los hechos colectivos, en los imaginarios populares y los comportamientos prácticos, y que solo después se validen electoralmente. Un *indio* como presidente de Bolivia fue una imagen que se desarrolló primero en el horizonte predictivo de una población sublevada y hastiada con un empresario que hablaba mejor el inglés que el español y que había entregado los recursos públicos al capital extranjero. Como ya adelantó Gramsci, las hegemonías son inicialmente culturales y políticas. Luego devienen políticas y electorales (Gramsci, 2023, C.1., S. 44, pp. 52-53).

La igualdad demoliberal es falaz, pues las condiciones materiales de acceso y desempeño

en el mercado político están desigualmente distribuidas. Es como una cancha de futbol inclinada sesenta grados: con respecto a sí misma, es plana, “igual para todos”; pero en relación con el horizonte y el centro de gravedad, está estrepitosamente inclinada. No importa cómo se desempeñen los jugadores, la pelota nunca llegará con fuerza al arco de arriba, inevitablemente caerá en el arco que se ubica abajo.

Pero hay otro principio de igualdad que la democracia liberal demandará que se le reconozca: el del intercambio de bienes políticos en el mercado de preferencias electorales. En el mercado de bienes, oferente y comprador intercambian mercancías portadoras de un valor mensurable e igual. Independientemente de si ese valor está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo (escuela marxista) o por la utilidad marginal que le asigna el comprador (escuela neoclásica), para acceder al producto del otro –un teléfono en algunos casos, dinero en otros...–, ambos deben entregar un valor similar en términos del intercambio. Aunque las mercancías sean de diferente valor de uso, tienen algo en común –el valor-precio– y una

igualdad fundamental –la magnitud de valor intercambiada–. De ahí que Marx dijera que el capitalismo supone la igualdad como un “prejuicio popular” (Marx, 1981, p. 1029). Pero en el mercado político las cosas no funcionan así. Lo que se intercambia son cosas inconmensurables entre sí. En términos formales, el votante entrega el voto y el oferente, una promesa, sin existir nada en común que las iguale. Esto empeora si tomamos en cuenta el contenido social de cada uno de estos flujos: el votante cede su soberanía, es decir, la facultad de decidir sobre los asuntos comunes, en tanto que el elector le entrega el monopolio de la decisión. Se trata de objetos políticos imposibles de ser igualados. El intercambio ha transcurrido sin que nada en común circule, sin que se valide ningún tipo de igualdad ni abstracta ni concreta entre los oferentes. De hecho, se trata de un intercambio en términos de desigualdad absoluta, pues mientras el votante entrega el único momento o “pase” para decidir sobre asuntos políticos que le otorga la democracia liberal, a cambio solo obtiene el monopolio de la facultad de decisión por parte de un otro que no es él. En los hechos, esto es una expropiación de

la soberanía política. Más que un acto de fe, implica una capitulación del votante frente al votado. Ya no estamos ni siquiera ante un *mercado* político propiamente dicho, que supondría el intercambio de algún tipo de igualdad, real o abstracta. Por el contrario, aquí el flujo es solo de abajo hacia arriba y opera como un robo, en este caso, de la soberanía política hasta que, en cuatro o cinco años, por un instante se le devuelva al sujeto su facultad de decisión soberana y se repita el ritual de expiación.

El envilecimiento del intercambio puede ser aún más atroz si, como sucede en sociedades con elevados índices de pobreza, de la liturgia que simula el intercambio de bienes políticos solo queda una venta de soberanía a cambio de comida o dinero, que ratifica sin sonrojo ni artilugio alguno que en la democracia liberal solo los ricos pueden gobernar.

Así, cuando se llega al último refugio de la igualdad simulada por la democracia liberal, el recuento en el que cada persona “vale” un voto y nada más, la igualdad ya ha quedado totalmente triturada por la desigualdad intrínseca en la conformación material de las élites políticas competidoras, por la inexistencia de un

intercambio de bienes conmensurables y por el clientelismo político. Cuando en tiempos de pasividad social se suman los votos, lo que se adiciona no son genuinas voluntades políticas, sino preferencias castradas, tornadas impotentes previamente ante el poder del dinero y de las élites políticas tradicionales. Y lo que queda es una aritmética de estafas eficientes.

La “voluntad general” constituida de esta manera pasiva es solo una aritmética de abdicaciones políticas ante los altares de los candidatos.

¿Significa esto que no sirve votar en las elecciones o que la representación es siempre una expropiación de voluntades? No, ni mucho menos. La votación para elegir gobernantes forma parte de la experiencia popular del hecho democrático, a pesar de que muchas veces lo que se obtiene es más sufrimiento o decepción. Incluso en los escasos momentos de efervescencia en los que la sociedad individuada se fusiona en una comunidad deliberante y protagónica de su destino, gran parte de la energía

popular constituyente se canalizará a través de la votación. La votación es, por tanto, una conquista democrática de las luchas sociales y cualquier reforma o ampliación de la democracia debe pasar ineludiblemente por la recuperación de la elección como modo de renovar gobernantes. Igualmente, la representación es parte de la experiencia cotidiana de cualquier forma organizativa popular. Un sindicato, una comunidad, una asamblea barrial, incluso una revuelta de democracia directa siempre despliega distintas formas de representación local o general de la voluntad colectiva. Pero, a diferencia del sistema electoral liberal, en estas experiencias el poder soberano de la gente nunca se entrega de manera irreversible y a plazo fijo para que el representante se apropie de él de manera personal. En estas otras múltiples formas flexibles de representación plebeyas, el representado guarda para sí el poder de impugnar, de desacatar e, incluso, de revocar el mero poder agregativo que posee el representante, por lo que la representación o las múltiples formas de representación son también parte del acervo colectivo de la sociedad organizada y en acción colectiva.

Lo que sí significa es que, cuando las clases populares concurren a la votación sin debate público participativo, sin una movilización que amplíe en la experiencia colectiva el campo de transformaciones posibles, sin horizontes compartidos de reformas que aumenten derechos, sin el entusiasmo movilizatorio de las clases populares por aumentar la igualdad material o defenderla, sin el control de su poder representado, lo más probable es que se consume una nueva estafa. Esa forma envilecida de la transacción política es el fundamento material de lo que O'Donnell, Iazzetta y Quiroga (2011) llamaban la democracia delegativa. Y, como se ve, no es una excepcionalidad latinoamericana, sino un desenlace ineludible de cualquier experiencia democrático-liberal del mundo. Solo la acción colectiva y el protagonismo social pueden desmontar la caja de *pasivización* electoral que significa la democracia liberal y ampliar los espacios de democratización de la política. Y –nuevamente– si esto sucede, no es por la democracia liberal, sino a pesar de ella.

TERCER LÍMITE. LA TENDENCIA CRECIENTE A LA OLIGARQUIZACIÓN DEL PODER

Si, como reitera Schumpeter, la democracia es la competencia entre grupos de individuos por la adquisición del derecho a decidir sobre el resto, es por demás evidente que la democracia en cualquiera de sus variantes liberales excluye el gobierno directo del pueblo. Ya sea cualquier definición que se tome –“selección de gobernantes”, “poliarquía” (Dahl, 1993, pp. 262-270), “gobierno para el pueblo”, etcétera–, el punto de partida es la imposibilidad de que el pueblo o *demos* se autogobierne. Y a partir de ahí, se hacen malabarismos para que el gobierno sobre el pueblo sea electo, que sea a través de representantes, que la elección sea transparente, competitiva, que el gobernante sea sometido a restricciones, etcétera.

Ciertamente, el liberalismo político enumera muchos argumentos para descartar el autogobierno del pueblo: desde que es imposible reunir a millones de deliberantes de un país en una gran asamblea, que la gente por lo general no se interesa por los asuntos públicos,

que hay temas demasiado especializados que requieren de expertos y burocracias eficientes, hasta que la voluntad mayoritaria puede interferir en las libertades individuales (Constant, 2008). Pero lo que son problemas y dificultades temporales que deberían ser resueltos con más democracia u otras formas complementarias de democracia, para el liberalismo son la virtud para justificar los dispositivos de expropiación de las facultades populares, esto es, de desdemocratización estructural. “¿Que no se pueden reunir millones de personas para deliberar...? Entonces erijamos pocos representantes para que ellos deliberen en nombre de la mayoría”, responde triunfante el liberal. No importa que en ocasiones recurrentes millones de personas sean capaces de reunirse para hacer oír su voz, su protesta o su decisión sobre algún tema, o que sea posible representar voluntades colectivas sin que el representante monopolice la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan a todos. Incluso hoy, los celulares, además de *selfies*, pueden intercomunicar opiniones y deliberaciones de millones de ciudadanos en torno a un tema relevante que afectará la vida de todos los miembros de la sociedad.

¿Que las personas por lo general no se involucran en los asuntos públicos? Por supuesto. Muchas veces esa apatía surge de la impotencia sentida frente a unas élites políticas insensibles que deciden más preocupadas por el monto de los sobornos que podrán recibir de los poderosos que por la opinión de los ciudadanos. Por otra parte, cuando la ciudadanía sí se involucra y sale a las calles a manifestar su posición, suele recibir a cambio represión policial y los insultos presidenciales, como recientemente sucedió cuando el presidente francés calificó a su pueblo movilizado de “flojo”.

¿Que hay asuntos demasiado especializados y que se requiere cierta agilidad decisional de los gobiernos? Ciertamente, pero, ¿quién puede garantizar que las decisiones que tomen las élites profesionales serán las que el pueblo desea o necesita? La profundidad de la actual crisis económica mundial, con su rosario de sufrimientos colectivos, es una comprobación fáctica de que las decisiones de burocracias y élites altamente profesionalizadas no necesariamente conducen a resultados satisfactorios para las mayorías. En particular, los grandes asuntos de Estado, como el uso de los recursos naturales, la estabilidad

laboral, la seguridad social, la educación o las políticas industriales, que van a afectar radicalmente la vida de todos los ciudadanos y de las futuras generaciones, deberían ser objeto de grandes debates públicos, lo más masivos posible, para tomar una decisión sobre el curso de las corrientes mayoritarias de ese debate.

¿Que las decisiones colectivas pueden afectar la intimidad individual? Solo de manera excepcional, cuando tales decisiones implican políticas de justicia redistributiva en relación con la propiedad privada en los casos en que esta es brutalmente ofensiva para la mayoría de las personas. Pero el resto de las libertades individuales, de expresar sus opiniones, de asociarse, de igualdad ante la ley, etcétera, no tiene por qué ser restringidas.

Así, las dificultades que podrían resolverse con formas enriquecidas de democracia y participación social, con la composición de nuevas y variadas instituciones democráticas populares, representativas y directas, son asumidas por la democracia liberal como justificación para desdemocratizar sus propias formas institucionales y concentrar autoritariamente las decisiones en élites especializadas que deciden el destino de la mayoría.

Con excepción de los momentos de efervescencia social en los que la representación electoral puede adquirir grados de transparencia inmediata con respecto al sentimiento popular, la “voluntad general” que emana de esta ruta procedimental del demoliberalismo es una ficción política.

La suma aritmética de preferencias individuales no es una voluntad política colectivamente construida, pues si lo fuera, Taylor Swift con sus 3.900 millones de visualizaciones y *likes* debería ser la presidenta del mundo o, al menos, la secretaria general de la ONU.

El liberalismo político suplanta la interacción política deliberativa del pueblo, la real “voluntad general”, por los *likes* del voto. El resultado final será la consagración de una voluntad de los poderosos bajo la ritualidad de la consulta a las mayorías menesterosas.

La democracia liberal, mediante la sistemática concentración de decisiones políticas en pocas manos, es, en definitiva, un algoritmo de oligarquización espectacularizada del poder político. Prioriza a las élites por encima del *demos*, la representación por encima de la participación, la especialización por encima de la deliberación. Y no se trata de una desviación del espíritu democratizante, sino de una elección premeditada de monopolización de decisiones en los representantes, aún más, en el Ejecutivo. De allí, el orgullo desenfrenado con el que enrostran su definición de democracia como selección de élites que toman decisiones.

La “ley de hierro” de Michels (2015) respecto a la inevitable oligarquización de las formas políticas partidarias y sindicales, en realidad, es un corolario de la ley de hierro de la inevitable oligarquización del Estado democrático-liberal. Ciertamente, hay momentos en que esta tendencia es revertida con el desplazamiento radical de élites políticas gubernamentales e incluso la modificación clasista y étnica de los grupos gobernantes. Pero eso sucede en momentos de grandes sublevaciones y revoluciones sociales que modifican las estructuras del Estado, las

instituciones y la composición social de los gobernantes. No es la democracia representativa la que promueve esta democratización de los sujetos en el poder político, sino precisamente su desborde por otras formas de democratización plebeyas. Sin embargo, la adopción de un tipo restringido de democracia representativa y el consiguiente enfriamiento del protagonismo social insurgente, más pronto o más tarde, llevará inexcusablemente al mismo camino de monopolización de las funciones de decisión del Estado. Podrá haber entre los nuevos gobernantes más indígenas, más mujeres o representantes de procedencia indígena o campesina –lo que, desde ya, es un gran avance democrático–, pero, de volver sin más al democratismo liberal, dejando de lado las formas de protagonismo democrático plebeyo, se retornará al monopolio del poder; puede que sea con otro color de piel y otros hábitos culturales, pero seguirá siendo monopolio al fin.

Se dirá que la democracia liberal ha permitido los grandes avances de derechos de las sociedades modernas. Pero, como nos recuerda T. S. Marshall, para Europa y Estados Unidos, los derechos de igualdad jurídica en el siglo

XVIII, de igualdad política en el siglo XIX y de derechos sociales en el siglo XX han correspondido a oleadas de movilizaciones, revoluciones y luchas colectivas, es decir, de formas plebeyas de democratización (Marshall y Bottomore, 1998). En América Latina, cada uno de estos derechos ha estado precedido de estallidos sociales, luchas sindicales e incluso insurrecciones populares para poder consagrarse. La propia democracia liberal, tal como la conocemos hoy, con su derecho al voto universal o a la asociación, han sido arrancadas en conflagraciones sociales contra gobiernos dictatoriales e incluso frente a gobiernos liberales. La democracia liberal permite mejores condiciones para la acción colectiva plebeya, pero, también, la propia acción colectiva plebeya es la que permite el surgimiento de la democracia liberal. Y, como sucedió en gran parte de Europa, la democracia liberal, y muchos de los avances sociales en el siglo XX, fueron la manera de contener la influencia de la Revolución soviética en el movimiento social europeo.

Que de la ineludible oligarquización de la política, con el tiempo, se pase a la privatización de los bienes públicos no es una falla, sino

una etapa lógica de la consolidación de la propia democracia liberal. La propia jibarización de la soberanía estatal para dar paso a la soberanía de los mercados globales muestra hasta qué punto la liturgia liberal de la representación agregativa es cada vez más una impostura teatralizada en el altar de un decisionismo político de los flujos transfronterizos del capital y las mercancías. Por eso, cuando en los años ochenta del siglo XX se consolida el matrimonio del modo de acumulación de libre mercado con el modo de dominación de la democracia liberal, lo que resulta es una natural homología de las prácticas sociales similares que tienden a seguir empoderando a los más poderosos. De ahí que, como lo han demostrado Elsässer, Hense y Schäfer para Estados Unidos y Europa, es una regla irresistible de la democracia liberal el contubernio de intereses económicos entre las élites empresariales y políticas al momento de la aprobación congresal de leyes (Elsässer, Hense y Schäfer, 2018; Elsässer y Schäfer , 2023).

La igualdad y sus múltiples agraviados

Roto el pacto social del Estado social debido a la crisis económica mundial de los años setenta del siglo pasado, todas las experiencias de privatización de empresas públicas, de recursos naturales, de desmantelamiento de derechos laborales, de reducción impositiva a los ricos, de transferencia de dinero público a empresas privadas que asolaron gran parte del mundo han venido de la mano de regímenes políticos democrático-representativos, incluidos los de reciente data de Europa del Este y Rusia.

En América Latina, la apropiación privada de lo público no formaba parte de los reclamos democráticos por los que la gente se movilizó contra las dictaduras. Los múltiples movimientos de derechos humanos, los diversos movimientos obreros, vecinales, juveniles y campesinos que reconquistaron las libertades democráticas en los años ochenta pelearon por su derecho a organizarse y opinar sin ser encarcelados o asesinados, por su derecho a protestar contra el abuso patronal sin correr el riesgo de ser luego desaparecidos, por su derecho a mejorar colectivamente sus condiciones de vida. Que estos reclamos luego se materializaran bajo la forma de un tipo de democracia representativa

era una posibilidad, pero no era ni la única ni la exclusiva forma política de su realización. Sin embargo, la oleada global neoliberal venía ya con un ímpetu arrollador. El estatismo desarrollista no tenía ya herramientas para remontar la crisis de la deuda y la inflación. Los organismos internacionales de crédito y los gobiernos más poderosos entonaban la misma balada de privatización y recorte del Estado social, en tanto que las izquierdas solo atinaban a arrojarse en el pasado estatista, tal vez ahora más extendido; en realidad, carecían de un proyecto de futuro. El neoliberalismo se presentó como el futuro y, con la caída de la Unión Soviética, como el único camino posible. Libre mercado y democracia liberal eran el glorioso destino final del progreso de la humanidad.

EL AGRAVIO A LA PLEBE

Cuarenta años después, los datos expresan elocuentemente esta gran estafa. Entre 1977 y 2022, el salario de un trabajador medio estadounidense creció en total 15 %; en cambio, el de los directores ejecutivos, un 1209 %. La diferencia entre los ingresos de ambos, que en

1980 era de 30 veces en favor del ejecutivo, en 2022 pasó a ser 344 veces (Bivens y Kandra, 2023). Hoy, el 10 % de los norteamericanos poseen el 76 % de la riqueza, y el 50 % pobre, solo el 1 % (Deaton, 2023). Para Europa, Piketty ha mostrado que el 10 % de la población más rica ha pasado de controlar el 28 % de la renta nacional en 1980 a ser propietaria del 36 % en 2020 (Piketty, 2019, p. 48). En América Latina, en el mismo periodo, las cosas han sido peores: entre 1980 y 2005 no solo la desigualdad, ya para entonces escandalosa, ha pasado del 0,5 al 0,52 en la escala de Gini, sino que, además, la pobreza pasó del 34 al 45 % de la población. El resultado económico de la fusión del neoliberalismo con la democracia liberal no ha sido afortunado.

Sin embargo, se dirá que, en los últimos treinta años, en el mundo la pobreza se ha reducido drásticamente del 36 % al 9 % entre 1990 y 2020 (World Bank, 2022). Si bien esto es cierto, su principal causa es el crecimiento de China, que no es precisamente un modelo de democracia liberal. Entre 1980 y 2020, China ha sacado a 800 millones de sus habitantes de la pobreza (World Bank y DRC, 2022), en lo que fue la

reducción de la miseria más rápida y numerosa que registra la historia humana.

Con estas cifras, la democracia liberal no tiene mucho de que enorgullecerse en cuanto a bienestar económico de los ciudadanos que se cobijan en ella. Si tuviera que resaltar algún emblema, sería la reducción de los impuestos a los ricos y la brutal contracción de la propiedad pública. En el primer caso, pasó, en Europa, del 70 % en los años setenta al 48 % en 2020, y, en Estados Unidos, del 72 % al 35 % (Piketty, 2019, p. 652). En cuanto a la propiedad pública, fue de moverse entre el 15 al 30 % del capital total en los años setenta del siglo XX, a fluctuar entre el 0 y 5 % en la década del 2020 (p. 726).

No resulta extraño, por tanto, que en los últimos años el malestar social y la desafección por la democracia se expanda por el mundo entero. ¿Si la democracia no llega a los bolsillos, por qué habría de reclamarse un apego popular a ella? La gente no come ni mejora sus derechos sociales con la proclama de los “valores” liberales, más aún cuando sus defensores occidentales los pisotean cuando de negocios y cálculos geopolíticos se trata; por ejemplo, financiando golpes de Estado para contener al

supuesto “comunismo”, como en Chile con Pinochet, o apoyándose en monarquías absolutas, como Arabia Saudita para contener a Irán, entre otros casos.

El desencanto con la democracia liberal tiene, por tanto, un fundamento material. Ella no ha podido, y quizá nunca podrá, democratizar la riqueza. Al contrario, fomenta su mayor concentración hasta un punto tal que rompe los márgenes sociales de tolerancia moral hacia las desigualdades. El retroceso de la adhesión democrática no es un problema de “falta de conciencia” de los pueblos, ni de errores pedagógicos, ni mucho menos de derivas autoritarias. Si fuera así, el problema del desapego se resolvería con propaganda y sermones. Es un tema de bienestar, de economía, de igualdad material y social. Si la democracia liberal no resuelve los temas que agobian a las sociedades, es inevitable que las personas asuman la democracia como un agravio y busquen otras opciones de organización política que les devuelvan la esperanza en mejores condiciones de vida.

Si nos fijamos con atención en las mediciones de lealtad democrática, los momentos

de mayor apego y confianza en ella son cuando está asociada a los avances en materia de igualdad, cuando se amplían derechos, cuando se redistribuye la riqueza, cuando mejora la salud y la educación públicas, etcétera. Entonces es cuando la gente ve que la democracia toca sus bolsillos, abre las puertas de las fábricas y del reconocimiento, como sucedió durante la primera oleada progresista latinoamericana entre los años 2004 y 2015. Durante esos años, la economía creció por encima del 3,1 %, la desigualdad se redujo del 0,52 al 0,46 en la escala de Gini, la pobreza se contrajo del 45 al 29 % (CEPAL, 2018). Setenta millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Las clases sociales de ingresos medios crecieron del 21 al 34 %, el consumo popular aumentó, el ahorro mejoró y, con todo ello, también el respaldo a la democracia. Pero todos estos avances no fueron el resultado directo de la vigencia de la democracia representativa, sino de otras democracias que empujaron e impusieron en las calles, en las revueltas, en los debates públicos y, luego, en las urnas, esas reformas. Ellas crearon la agenda de igualdad en los imaginarios colectivos, lo que luego dio paso a la emergencia de

liderazgos y partidos con la suficiente legitimidad como para ganar elecciones y cumplir esas disponibilidades.

Las agendas de igualdad siempre son democratizaciones plebeyas que cambian el sentido común de las sociedades y predisponen a cambios políticos institucionales. Son estas democracias plebeyas, de mujeres, de indígenas, de pobladores, de obreros y jóvenes, las que alumbran otros cursos de acción posibles que luego crean nuevas mayorías electorales para su realización gubernamental. El progresismo fue eso: un movimiento que, al mejorar las condiciones de vida de las mayorías, retribuyó exitosamente las expectativas que sobre él habían depositado las clases menesterosas. El ciclo virtuoso de reformas por la igualdad sería tanto más duradero y profundo cuanto más las diversas formas de acción colectiva, es decir, de institutos democráticos plebeyos empujaran, guiaran o disciplinaran a los gobiernos nacional-populares electos. Pero cuando esas mejoras materiales se detuvieron o, peor, retrocedieron, la frustración y la decepción se apoderaron de los sentimientos colectivos. Durante más de una década, la gente había

asociado bienestar y participación con democracia y Estado redistribuidor; si ese bienestar y esa participación se detenían o, peor aún, se comprimían dramáticamente, democracia y Estado no podían menos que hundirse en la escala de valores de una parte significativa de las clases subalternas.

La gente apoya a las izquierdas y los progresismos porque ha experimentado en carne propia el maltrato y el empobrecimiento neoliberal. Pero si el progresismo que llega al gobierno prometiendo bienestar y protección no cumple lo que prometió o empeora las condiciones de vida de las clases populares, lo que se produce inicialmente es un colapso cognitivo de las adhesiones y esperanzas. El estupor se apodera de todo, las creencias se diluyen, el desánimo y la desafección inundan todo. Los humildes se sienten traicionados y, luego, buscan no solo aferrarse a cualquier solución nueva que les devuelva la certidumbre imaginaria de un porvenir, sino, además, algunos quieren sancionar a quienes los defraudaron.

El apoyo de sectores populares a soluciones de derecha autoritaria y en ocasiones, antidemocrática, será la vía para exteriorizar ese enojo colectivo.

No es que el pueblo se haya vuelto neoliberal ni que anhele perder los derechos conquistados a lo largo de siglos, pero si la democracia y el progresismo no significan avances en términos de igualdad material y social, la búsqueda de otras opciones individualistas y autoritarias está servida.

El abandono de la agenda plebeya de la democracia como igualdad ha de engendrar monstruos que amenazarán con devorar a la sociedad. Ya sea por la vía de la oligarquización del poder, de la concentración de la riqueza o del fracaso progresista, la pasión por la desigualdad y el autoritarismo emergerán de las entrañas de la propia

democracia liberal y de su empleo como mera selección competitiva de élites.

EL AGRAVIO A LOS PRIVILEGIOS

En ocasiones, paradójicamente, la propia aplicación de la democratización económica también engendrará tendencias autoritarias, como si la igualdad tuviera un costo social que se debe asumir. A diferencia de las anteriores desdemocratizaciones liberales, en este caso es la propia ampliación sustantiva de la democracia, o lo que Rancière (2011) denomina “la parte de los que no tienen parte”, la que generará reacciones mezquinas de defensa de privilegios y de minorías, proporcionalmente hablando.

Un ejemplo de ello son las derivaciones políticas de lo que Milanović denomina la “curva de elefantes”, esto es, la modificación mundial de los ingresos. En las últimas décadas, las economías de bajos ingresos y densamente pobladas han tenido un incremento de los ingresos de sus clases menos favorecidas mayor –en términos proporcionales– que los incrementos en los ingresos de las clases medias de las economías

desarrolladas. Esta situación se debe fundamentalmente al crecimiento de China y la India. En tanto que, en contraparte, el 10 % más rico de las economías “avanzadas” han visto disminuidas sus rentas. Las mediciones globales comprueban que las clases populares y medias de las economías occidentales que durante un siglo ocuparon la posición media alta y alta de los ingresos mundiales ahora están retrocediendo. Si se considera que cero representa un momento de igualdad absoluta, en la que todos los habitantes del mundo tienen los mismos ingresos, y cien simboliza la situación hipotética en la que una sola persona concentra todos los ingresos, por ejemplo, un ciudadano pobre de Norteamérica que en 1988 ocupaba el percentil 74 (alto) de los ingresos mundiales, en 2018 ocupa el percentil 67. De la misma manera, un italiano de ingresos medios ha visto caer su posición 20 puntos durante el mismo periodo. En general, se evidencia un declive en el rango global de riqueza de los sectores medios y pobres de los países occidentales. En contraparte, un ciudadano medio chino, que en 1988 ocupaba el percentil 35 (bajo) de la riqueza mundial, ha alcanzado el percentil global 70 en 2018 (Milanović, 2023).

Así, pareciera que las clases medias y bajas de Occidente están siendo gradualmente desplazadas en su jerarquía mundial y en el acceso a bienes globales (eventos culturales, vacaciones, innovaciones tecnológicas, etc.), por una nueva clase media global proveniente de los países asiáticos. A medida que ciertos consumos globales se están volviendo inaccesibles para estas clases populares y medias occidentales, la sensación de “pérdida” se acrecienta y da pie a un espacio de disponibilidad para el crecimiento de discursos de odio, *patrioteristas* y antimigrantes. Los avances en igualdad, en este caso global, generan un contramovimiento antiigualitario, en esta ocasión en el llamado Occidente. De aquí que no sea extraño que las narrativas polarizantes, antiigualitarias e incluso iliberales recluten muchísimos adeptos.

A una escala mucho más reducida, lo que ha acontecido en Bolivia durante el golpe de Estado del 2019 tiene sus semejanzas. Desde la llegada de Evo Morales al gobierno entre 2006 y 2019, cerca de un 30 % la población, mayoritariamente indígena, pasó de la pobreza a percibir ingresos medios. El salario mínimo se multiplicó por cinco, el crecimiento

económico se estabilizó en torno a un 4,5 % anual y la desigualdad paso de 0,58 a 0,41 en la escala de Gini (UDAPE, 2019). Sin embargo, desde inicios del gobierno, sectores de clase media tradicional, vinculados a profesiones liberales y a la antigua administración pública, se posicionaron desde una irreductible oposición política y, con el tiempo, asumieron un antagonismo cultural militante a todo lo que el gobierno de indígenas representaba. Pese a que en catorce años no habían sido objeto de ninguna temida expropiación de bienes, habían mejorado gradualmente sus ingresos salariales y hasta había aumentado su capacidad de consumo y ahorro, en 2019 salieron a las calles, realizaron paros y protestas, quemaron ánforas electorales, apoyaron el nombramiento de una presidenta sin sesión en el Congreso, legitimaron la masacre cometida por militares y policías en contra de humildes pobladores que defendían al gobierno democrático y hasta rezaron alrededor de cuarteles militares para que los uniformados instaurasen una dictadura militar.

Esta politización desdemocratizadora entre las clases medias tradicionales bolivianas

acontece por la pérdida de reconocimientos, de exclusividades, de cargos y contrataciones estatales anteriormente asequibles de manera “naturalizada” por origen social, abolengo y lealtad étnica. Estos son bienes y recursos que ahora están a disposición de muchas más personas, procedentes de orígenes sociales e identidades étnicas diferentes, como las naciones indígenas. La instauración de un Estado plurinacional ha significado un raudo ascenso socioeconómico de sectores indígena populares y ha posibilitado la eliminación de la designación por origen social en la totalidad de las jerarquías de la burocracia estatal que, además, debido a las políticas de nacionalización, ahora controla cerca del 35 % del PIB nacional. El Estado ha trastocado los títulos de legitimación para optar a un puesto laboral (ministerios, diputaciones, sistema de justicia, embajadas, empresas públicas, etcétera) o la adjudicación de obras públicas. Si antes contaban un apellido de origen extranjero, redes de amistad endogámicas, un título de posgrado, el color de piel blanqueado (el *capital étnico*); ahora cuenta muchísimo más la filiación a un sindicato obrero o campesino, saber hablar

aymara o quechua o moverse en las redes de lealtad étnica de las comunidades indígenas.

El ascenso económico de sectores populares e indígenas, con la consiguiente devaluación de la etnicidad criollo-mestiza para acceder a reconocimientos, contrataciones y nombramientos públicos, ha significado un avance extraordinario de la igualdad social. Esto es algo que debe continuar. Pero **estos avances de justicia social y democratización económica también han despertado odios viscerales y resentimientos morales de unas clases medias tradicionales que viven esta ampliación de derechos colectivos como una expropiación imperdonable de su estatus social, de sus privilegios de sangre y color de piel heredados de sus padres y abuelos.** Para ellas, la igualdad es un agravio al orden naturalizado de la

sociedad y su rebelión es el alarido político de los frustrados (Turchin, 2023).

Nos encontramos, entonces, con que la democracia entendida como igualdad también tiene sus costos políticos y polarizaciones. Aun cuando se produce una mejora en los ingresos económicos de las clases medias y altas, el retroceso en sus jerarquías y antiguos privilegios debido a políticas de igualdad produce en ellas sensaciones de “pérdida” y desquiciamiento del orden moral de la sociedad por intrusión de sectores “igualados”. Sin embargo, a diferencia de las derivas autoritarias y monopólicas que fomenta la democracia liberal, estas últimas son fruto de la propia expansión sustantiva de la democracia, de logros en justicia social y pueden ser atenuadas con aún más políticas democratizadoras aplicadas esta vez sobre los recursos de las élites más enriquecidas, impuestos progresivos sobre las fortunas, redistribución de la gran propiedad, entre otras opciones. Además, los hechos relevantes de estos avances en la igualdad no vienen precisamente de las instituciones democrático-liberales. En el caso de los avances recientes en materia de igualdad global, estos vinieron de la mano de un sistema político de

partido único adherido a un Estado productor (China). En el caso de la igualdad en Bolivia, esta se produjo a partir de una insurrección indígena que permitió ocupar y transformar el aparato de Estado.

EL AGRAVIO A LOS AUTORITARIOS

Finalmente, hay que considerar el agravio que las políticas democráticas igualitarias representan para las élites liberales. En tiempos de crisis económica y de legitimación política de nuevos sujetos sociales es natural que los consensos políticos se fragmenten y que las viejas élites políticas diverjan sobre las maneras de mantener la dominación social. Una parte de las derechas se radicalizará (Mudde, 2021) y buscará retornar al viejo orden, solo que ahora, para ello, en vez de la seducción, hará uso de la sanción, el castigo o la venganza hacia quienes considera que son los maliciosos responsables de este desorden no solo económico sino también moral: sindicatos “ambiciosos”, migrantes que “arrebatan” empleos, mujeres que “exageran” en sus derechos, indígenas “igualados”, un Estado que roba a los emprendedores, comunistas que encarnan al

demonio en la tierra, etcétera. Sin comprender que el debilitamiento del proyecto neoliberal es el resultado de sus propios límites, buscarán en el disciplinamiento feroz de los díscolos la llave para que la sociedad pueda retornar al orden y a los viejos valores morales. Se trata de derechas autoritarias, cada vez más antidemocráticas y racistas, claramente *fascistizadas*, que buscan canalizar el miedo social a la ausencia de futuro hacia la venganza y el castigo y reemplazan el convencimiento por la imposición que es propia de los proyectos decadentes. Añoran la vieja estabilidad del mercado, aborrecen los derechos cristalizados en el Estado, les indigna la igualdad porque consideran que eso destruye las jerarquías sagradas de la empresa, la familia y la servidumbre individual. Son melancólicos de un imaginado e idílico pasado mercantil en el que los capaces tenían lo suyo y los fracasados, el desprecio merecido de la marginalidad. Pero, si antes creían que la autoridad del mercado era fruto del convencimiento y de su superioridad histórica sobre el Estado, ahora consideran que hay que imponerla, a palos si es necesario. Creen que la democracia ha premiado a una mayoría incompetente e ignorante a la que, por salud

pública, hay que hacer entrar a la fuerza a las virtudes del individualismo, el mercado y la ley del más fuerte. La democracia les parece un exceso; los derechos, un exabrupto; y la igualdad, un insulto. Por eso, cuando pueden, asaltan los parlamentos, como en Estados Unidos o Brasil. Si es necesario, están dispuestos a masacres y golpes de Estado, como en Bolivia. No son demócratas por convicción, sino por utilidad táctica.

Por todo ello, estas derechas antidemocráticas y antiigualitarias no son una excrecencia parasitaria de la democracia liberal, sino la desembocadura inevitable de las aberrantes injusticias que se acumulan en el tiempo.

Democracia compuesta

El debilitamiento del apego democrático de las sociedades no es, por tanto, un tema transitorio sino estructural. La abstención electoral, la corrosión de los mecanismos representativos en la toma de decisiones, el apoyo a otros regímenes de gobierno no democráticos y el respaldo a propuestas autoritarias son los síntomas de un declive histórico institucional de la forma dominante de la democracia, a saber, la democracia representativa liberal que, por sí misma, no puede subsanar esa pendiente porque emerge de sus propias cualidades intrínsecas. Lo peor es que este marchitamiento demoliberal amenaza con devaluar también otras formas democráticas alternativas existentes.

Es lógico: si a las autoridades electas no les importa el sufrimiento económico o social de los votantes, ¿por qué ellos habrían de confiar en la importancia de su voto o la eficacia benévola de la autoridad? No tienen motivo alguno para hacerlo. Si las dificultades de la vida diaria no merman o incluso se agravan con cada nueva votación, ¿por qué los votantes habrían de tener entusiasmo por participar en las elecciones? Si la selección de autoridades es reiterativamente una mera competencia por cargos

públicos de un puñado de allegados, ¿por qué el vecino desempleado habría de defender las anquilosadas instituciones representativas?

Esa es la fuente del problema. Cuando la democracia abandona la misión de la igualdad y se concentra mezquinamente en los “principios y valores”, tal como lo hace contemporáneamente la democracia representativa liberal, se mutila el ideario democrático de la sociedad que ve cómo solo unos diminutos grupos que viven de la *rosca política* se benefician con los mentados “valores y principios”.

En la memoria popular, la “democracia verdadera”, como la llamaba Marx (1982, p. 344), fue y debiera ser una creciente mejora de las condiciones de vida de las mayorías, de su influencia diaria en los asuntos comunes y la seguridad de saber que a sus hijos les iría mejor todavía. Fue y debiera ser un horizonte predictivo de bienestar y protagonismo social.

Democracia, en los momentos de lealtad hacia ella por parte de las mayorías populares, fue poder comer mejor que la semana

pasada sin que otros comieran peor; fue tener una remuneración laboral mejor que el mes anterior sin que otros acapararan fortunas para los cien años venideros; fue recibir una educación y salud mejores que el año anterior; fue comprobar que su trabajo y su derecho eran similares a los de los demás; fue saber que su preocupación, su dignidad y su voz cotidiana contaban a la hora de definir el destino colectivo. Es decir, fue la ruta de la igualdad.

Y está claro que para alcanzar ese mínimo de convivencia gratificante, la democracia representativa ya no basta.

¿Significa esto que hay que arrojar la democracia representativa al basurero de la historia? No, en absoluto. La democracia representativa

liberal forma parte de los artefactos políticos que las sociedades contemporáneas han creado para organizar la vida en común. Es una conquista histórica frente a las dictaduras y las dinastías. En ella está amalgamada la historia de las libertades individuales básicas de las personas para asociarse sin coacción, para pensar lo que quieran sin miedo a ser exterminadas, para poder participar regularmente en la elección de autoridades. Y esa es la base mínima indispensable de cualquier otra forma de gobierno que supere con más democratización a la democracia representativa.

Pero, a la vez, está claro que la misión de la igualdad material, pilar de la adhesión democrática de las mayorías sociales, no emerge del igualitarismo formal y decorativo que impulsa la democracia liberal. La demanda de igualdad sustantiva viene de otros tipos de familias democráticas plebeyas. Viene de la comunidad agraria que pone límite a la propiedad individual y continuamente atempera las diferencias redistribuyendo la riqueza concentrada. Viene de los sindicatos laborales que en la pugna salario-ganancia buscan acortar las diferencias entre lo que se apropia el patrón y lo que queda

para los trabajadores, además de democratizar la toma de decisiones y la propiedad de la empresa. La igualdad viene de los movimientos sociales disruptivos que siempre son portadores de horizontes universales, ya sea para recuperar la propiedad común de recursos naturales o empresas estratégicas, o para para ampliar un nuevo derecho, un reconocimiento o una redistribución de la riqueza social. Se trata de otras formas políticas de democracia, porque la gente participa, delibera, toma determinados asuntos que la afectan en sus manos para resolverlos; incluso de modos flexibles de representación sin delegación del poder, pero que se organizan en torno a principios igualitarios de democratización de recursos materiales o de reconocimientos.

Igualmente, el protagonismo político de la sociedad, en el que la gente de a pie es reconocida cotidianamente como portadora de ideas, de preocupaciones y soluciones a los temas que la afectan, no viene del voto mercadeado cada cinco años a cambio del posterior silencio sepulcral propio de la democracia liberal. Las personas no son números que solo sirven para ser recontados en cada elección nacional,

son seres vivos que producen continuamente ideas, que desean ser tomados en cuenta tantas veces como los gobernantes quieren decidir los asuntos medulares de la vida en común. Y ello siempre viene de la mano de las múltiples estructuras moleculares de la sociedad; viene de la mano de sus demandas movilizadas, de sus asambleas barriales, de sus marchas de protesta, de sus levantamientos, estallidos e insurrecciones. Todas ellas son maneras de protagonismo plebeyo de la sociedad que, bajo formas contingentes de democracia directa y democracia representativa no autonomizada, sin mucho esfuerzo, pueden ser complementadas y canalizadas mediante formas de codecisión gubernativa y protagonismo comunicativo institucional a través de las plataformas tecnológicas de información, consulta, cabildeo y decisión.

Para recuperar las confianzas colectivas, la democracia necesita democratizarse con las múltiples formas de participación de la plebe en acción. No se trata de especular ociosamente con recetas normativas de lo que “debiera” ser la democracia. Ese es un impotente y vano ejercicio mental. Solo se trata de desbloquear lo existente, de liberar la energía constituyente y

gubernativa de las múltiples formas de democratización plebeyas, directas y representativas existentes frente a nuestros ojos. Se trata de una operación de coexistencia decisional de cogestión y codeterminación gubernativa de varias formas democráticas, incluida la democracia liberal, y de otras que podrán emerger con el tiempo. Es decir, se trata de dar paso a la democracia como cogobierno compuesto por múltiples democracias.

Con ello, se desbloquea una realidad multi-democrática de las sociedades que, hasta ahora, para manifestarse frente a un minimalismo demoliberal atrincherado en sus feudos oligarquizados, ha tenido que irrumpir como levantamiento o estallido social. Además, la misión de la igualdad como práctica democrática sustantiva dejará de ser una retórica abstracta, o una mera buena intención pasajera, para sostenerse en el propio impulso de la sociedad en la gestión de las cosas comunes que ha heredado, que tiene y desea tener mañana en su vida en común.

No se trata de estatizar la acción colectiva y los movimientos sociales. Esa sería la muerte de estas formas de democratización plebeyas. La fuerza de estas experiencias democráticas

radica en que surgen por fuera del Estado. A veces contra el propio Estado. Pero, tal como la historia de las luchas sociales demuestra a lo largo de estos siglos, estas expresiones de asociatividad no estatal siempre han inscripto en el propio ordenamiento estatal de leyes, decretos, presupuestos e instituciones, los breves e intensos momentos de sus victorias y los largos y recurrentes momentos de sus derrotas. Ahora lo que se trata es de inscribir estas pulsiones igualitarias y democratizadoras de la autonomía de lo social como parte de la continua democratización de las decisiones gubernamentales. Y como el Estado es la cristalización de lo común de una sociedad, solo que por monopolios con efecto vinculante, de lo que se trata es de construir institucionalidades gubernativas, flexibles y sensibles, capaces de articular estas múltiples formas de deliberación y decisión social al menos en la codecisión de los temas centrales que afectan la vida material del conjunto de la sociedad. Se trata de andar por un camino donde la autodeterminación social se mira en lo que esta tiene de antagonismo hacia el Estado, pero también en su tensionada complementariedad y codeterminación gubernativa.

Y está claro que esta composición igualitaria de democracias no será fruto de una astucia gubernamental: como siempre, será, en caso de darse, una obra de la propia acción colectiva y protagonista de la sociedad. En otras palabras, la salvación de la democracia no vendrá de la mano de quienes hacen de ella un negocio político de oligarquías. El renacimiento democrático, como siempre, será una obra de la propia insurgencia democrática de la sociedad, especialmente de sus clases menesterosas.

Bibliografía

- Anderson, Perry (2019). *Brasil. Una excepción. 1964-2019*. Madrid: Akal.
- Ayuso, Silvia (19 de octubre de 2022). Borrell suscita el rechazo internacional por comparar a Europa con un “jardín” y al resto del mundo con una “jungla”. *El País*. <https://elpais.com/internacional/2022-10-19/borrell-suscita-el-rechazo-internacional-por-comparar-a-europa-con-un-jardin-y-al-resto-del-mundo-con-una-jungla.html>
- *BBC News Mundo* (25 de septiembre de 2023). La polémica ovación a un veterano nazi en el Parlamento de Canadá. <https://www.bbc.com/mundo/articles/cyd1pjmd1y2o>
- Bivens, Josh y Kandra, Jori (21 de septiembre de 2023). CEO pay slightly declined in 2022. *Economic Policy Institute*. https://www.epi.org/publication/ceo-pay-in-2022/?utm_source=substack&utm_medium=email#fig-a
- Bobbio, Norberto (1986). *El futuro de la democracia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bown, Chad P. (6 de abril de 2023). *US-China trade war tariffs: an up-to-date chart*. Peterson Institute for International Economics (PIIE).

<https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart>

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2018). *Medición de la pobreza por ingresos: actualización metodológica y resultados*. Metodologías de la CEPAL, N° 2. Santiago: Naciones Unidas.
- Constant, Benjamin (2008). *Del espíritu de conquista y de la usurpación*. Madrid: Tecnos.
- Criscuolo, Chiara et al. (2023). Quantifying industrial strategies across nine OECD countries. *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers* (150). <https://doi.org/10.1787/5f2dcc8e-en>
- Dahl, Robert (1993). *La democracia y sus críticos*. Buenos Aires: Paidós.
- Deaton, Angus (2023). *Economics in America*. Princeton: Princeton University Press.
- Elsässer, Lea y Schäfer, Armin (2023). Political inequality in rich democracies. *Annual Review of Political Science*, 26(1), 469-487.
- Elsässer, Lea; Hense, Svenja y Schäfer, Armin (2018). *Government of the people, by the elite, for the rich: unequal responsiveness in an unlikely case* (N° 18/5). MPIfG discussion paper.
- *France 24* (15 de marzo de 2023). Macron promulga la impopular ley de la reforma de pensiones en

Francia. <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230415-macron-promulga-la-impopular-ley-de-la-reforma-de-pensiones-en-francia>

- Gramsci, Antonio (2023). *Cuadernos de la cárcel. Cuadernos 1-5 (1929-1932)*. Madrid: Akal.
- Gurr, Ted Robert (2012). *Why men rebel*. London: Routledge.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (2023). *The global state of democracy 2023. The new checks and balances*. <https://www.idea.int/sites/default/files/2023-11/the-global-state-of-democracy-2023-the-new-checks-and-balances.pdf>
- International Monetary Fund (IMF) (2023). *World economic outlook: navigating global divergences*. Washington, DC. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023>
- Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel (2018). *Cómo mueren las democracias*. Barcelona: Ariel.
- Manin, Bernard (2018). *Los principios del gobierno representativo*. Madrid: Alianza.
- Marey, Macarena (2011). Democracia deliberativa y democracia agregativa. *Ideas y Valores*, 60(147), 153-175. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/194181>

- Marshall, Thomas Humphrey y Bottomore, Tom (1998). *Ciudadanía y clase social*. Madrid: Alianza.
- Marx, Karl (1981). *El capital*. Tomo I. México: Siglo XXI.
- Marx, Karl (1982). De la crítica de la *Filosofía del derecho* de Hegel. En *Escritos de juventud*. México: FCE.
- Michels, Robert (2015). *Los partidos políticos*. Tomo I. Buenos Aires: Amorrortu.
- Milanović, Branko (2023). The great convergence: global equality and its discontents. *Foreign Affairs*, 102.
- Mounk, Yascha y Foa, Roberto Stefan (16 de abril de 2018). The end of the democratic century. Autocracy's global ascendance. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-04-16/end-democratic-century>
- Mudde, Cas (2021). *La ultraderecha hoy*. Barcelona: Paidós.
- O'Donnell, Guillermo; Iazzetta, Osvaldo y Quiroga, Hugo (coords.) (2011). *Democracia delegativa*. Buenos Aires: Prometeo.
- Our World In Data (2022). *Democracy index 2022*. <https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu?time=2022>
- Piketty, Thomas (2019). *Capital e ideología*. Buenos Aires: Paidós.

- Piketty, Thomas y Cagé, Julia (2023). *Une histoire du conflit politique: élections et inégalités sociales en France, 1789-2022*. París: Éditions du Seuil.
- Przeworsky, Adam (2022). *La crisis de la democracia. ¿Adónde pueden llevarnos el desgaste institucional y la polarización?* Buenos Aires: Siglo XXI.
- Jacques Rancière (2011). Universalizar la capacidad de cualquiera. En *El tiempo de la igualdad* (pp. 233-234). Barcelona: Herder.
- Repucci, Sarah y Slipowitz, Amy (2021). Democracy under siege, 2021. *Freedom House*. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege>
- Rosanvallon, Pierre (2020). *El siglo del populismo*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Runciman, David (2019). *Así termina la democracia*. Barcelona: Paidós.
- Schumpeter, Joseph (1983). *Capitalismo, socialismo, democracia*. Barcelona: Orbis.
- Sgaravatti, Giovanni Simone; Tagliapietra Trasi, Cecilia y Zachmann, Georg (26 de junio de 2023). National policies to shield consumers from rising energy prices. *Bruegel Datasets*. <https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices>

- *The Economist* (1° de febrero de 2023). The world's most, and least, democratic country in 2022. <https://www.economist.com/graphic-detail/2023/02/01/the-worlds-most-and-least-democratic-countries-in-2022>
- The Economist Intelligence Unit (EIU) (2020). *Democracy index 2020*. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>
- The White House (27 de abril de 2023). Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan on renewing American economic leadership at the Brookings Institution. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/>
- Turchin, Peter (2023). *End times. Elites, counter-elites, and the path of political disintegration*. Nueva York: Penguin Press.
- Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (julio de 2019). Informe [documento interno de trabajo]. La Paz.
- Von der Leyen, Úrsula (2023). Discurso de la presidenta Von der Leyen sobre las relaciones UE-China ante el Mercator Institute for China Studies y el European Policy Centre. *Agenda Pública*.

<https://agendapublica.elpais.com/noticia/18507/discurso-presidenta-von-der-leyen-sobre-relaciones-ue-china>

- Wolf, Martin (2023). *La crisis del capitalismo democrático*. Barcelona: Deusto.
- World Bank (2021). *Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de \$1,90 por día (2011 PPA) (% de la población) - China, Upper middle income* [Base de datos]. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.DDAY?locations=CN-XT>
- World Bank (2022). *Correcting course. Poverty and shared prosperity 2022*. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/b96b361a-a806-5567-8e8a-b14392e11fa0/content>
- World Bank (2023). *Global economic prospects*. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/6e892b75-2594-4901-a036-46d0dec1e753/content>
- World Bank y Development Research Center of the State Council, the People's Republic of China (DRC) (2022). *Four decades of poverty reduction in China drivers. Insights for the world, and the way ahead*. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/e9a5bc3c-718d-57d8-9558-ce325407f737/content>



LIBRERÍA
**LATINOAMERICANA
Y CARIBEÑA DE
CIENCIAS SOCIALES**

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a libreria.clacso.org

